



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA FEDERACIÓN

Lic Jorge

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA FEDERACIÓN
PRIMERA SALA

FORMA 1-A

2019 ENE 16 PM 2 38

2019 ENE 10 PM 12 08

VOTO CONCURRENTES

SECRETARÍA DE ACUERDOS
REVISIÓN DE ENCOMENDAS
Y CONCLUSIONES

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA FEDERACIÓN

QUE FORMULA EL MINISTRO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA EN RELACIÓN CON EL AMPARO EN REVISIÓN 1115/2017

PS-00663

1. El voto concurrente que presento tiene la finalidad de explicar las razones por las cuales, si bien coincido con el otorgamiento del amparo, me separo de algunas de las consideraciones de la ejecutoria y porque considero que en la decisión se debieron incorporar otras complementarias. Lo expuesto en los párrafos siguientes, en su mayoría, es una reiteración de mi voto concurrente en el amparo en revisión 2072017, primer precedente en donde se trató el tema del consumo lúdico de la marihuana.
2. Hecha esta aclaración, en primer lugar, estimo necesario destacar que desde febrero de 2013, a dos meses de haber iniciado mi mandato como Ministro de la Suprema Corte de Justicia, he votado por la inconstitucionalidad de los límites de consumo en la Ley General de Salud, destacando que es inadmisibles penar a una persona farmacodependiente que posee una cantidad mayor de droga de la permitida legalmente. La farmacodependencia es una enfermedad y el Estado no puede sancionarlo por una condición de salud. A diferencia de la mayoría de la Sala, me he pronunciado en ese sentido en los recursos en revisión [REDACTED] y mis votos así lo demuestran.
3. La interrogante que surge con el caso que decidimos (ahora desde el ámbito del derecho administrativo), radica en examinar la regularidad constitucional del uso de la marihuana, ya no para personas farmacodependientes, sino para personas que deseen usar dicha sustancia para meros fines lúdicos o recreativos; es decir, si es permisible la prohibición absoluta para sembrar, producir y consumir marihuana. Desde mi perspectiva, la pregunta que tenemos que responder desde la Constitución es la siguiente: ¿el Estado tiene el derecho de decidir lo que cada uno de nosotros puede hacer en su vida privada respecto de su persona?; es decir, ¿cada persona es libre para decidir lo que puede hacer consigo misma en su ámbito privado o no?
4. Como se precisó en la sentencia, la materia de análisis del presente amparo en revisión consiste en el examen de los artículos 234, 235, último párrafo, 237,

245, fracción I, 247, último párrafo, 248 y 368 de la Ley General de Salud, aplicados en el oficio de 24 de noviembre de 2015, emitido por el Comisionado de Autorización Sanitaria de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Este conjunto de normas se caracterizan como un "un sistema de prohibiciones administrativas", que forma parte del marco regulatorio sobre el control de estupefacientes y psicotrópicos, el cual constituye un obstáculo jurídico para poder estar en posibilidad de llevar a cabo el autoconsumo de marihuana al prohibir un conjunto de acciones indispensables para ello (siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte, etcétera).

5. En ese sentido, como punto de partida de mi posición, estimo necesario precisar que no es un obstáculo técnico del estudio de fondo realizado en la sentencia, la exclusión de la actividad inicial que permite la realización de todas las acciones necesarias para el consumo personal de la marihuana, como es la adquisición de la semilla. De seguirse este argumento hasta sus últimas consecuencias llevaría a razonamientos inusitados, dado que, por ejemplo, esta Suprema Corte tendría que concluir que existe un obstáculo técnico que impediría a las personas ubicarse en la causa excluyente del delito de posesión de narcóticos por farmacodependientes prevista en la Ley General de Salud, siempre y cuando sea por debajo de las cantidades previstas en la tabla inserta por el legislador federal, lo que haría inoperativa una disposición legal a la que hemos reconocido eficacia.¹
6. En efecto, uno de los puntos debatidos en relación con el presente asunto fue que, si bien mediante la concesión del amparo se estaba autorizando a los quejosos la siembra, cultivo, cosecha, preparación, transporte y consumo, dicha autorización no preveía la adquisición de la semilla, lo cual –hasta ahora– se considera ilegal. Al margen de que yo siempre me he pronunciado por la

¹ Véase, por ejemplo, la tesis de jurisprudencia 43/2012, de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 341 del libro XI (agosto de 2012) Tomo 1 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "FARMACODEPENDENCIA. CONSTITUYE UNA CAUSA EXCLUYENTE DEL DELITO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 15, FRACCIÓN ix, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, CONDICIONADA A LA POSESIÓN DE NARCÓTICOS Y EN LAS CANTIDADES ESTABLECIDAS EN LA TABLA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 479 DE LA LEY GENERAL DE SALUD."

También véase la tesis de jurisprudencia 74/2010, visible en la página 368 del Tomo XXXIII (febrero de 2011) del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "FARMACODEPENDENCIA. CONSTITUYE UNA CAUSA EXCLUYENTE DEL DELITO CONDICIONADA A LAS DOSIS MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 479 DE LA LEY GENERAL DE SALUD."



VOTO CONCURRENTENTE EN EL AMPARO EN REVISIÓN 1115/2017

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

invalidez de la tabla que permite el consumo de cierta cantidad de drogas – entre ellas, la marihuana– a farmacodependientes, es claro que dentro los límites cuantitativos impuestos por el legislador, los obstáculos legales para la adquisición de la semilla no impidieron al legislador federal establecer una causal de exclusión que permite a las personas con farmacodependencia poseer ciertas cantidades de narcóticos, con independencia de la condición jurídica del acto de adquisición de la semilla y de las consecuencias punitivas que podrían recaer por un tercero con quien se entable una transacción.

7. Ciertamente, tampoco la imposibilidad legal de adquirir la semilla de la marihuana ha impedido a la mayoría de los integrantes de la Sala analizar la validez de los límites de la excluyente del delito de posesión mencionado, concluyendo que “la posesión de narcóticos en cantidad superior a las establecidas en la tabla de referencia, no actualiza la causa de exclusión del delito contemplada en el artículo 15, fracción IX, del Código Penal Federal, no obstante que el sujeto activo padezca dicha enfermedad”.² En suma, el estatus ilícito de la adquisición de la semilla no es un obstáculo para que las autoridades ministeriales y judiciales de este país apliquen la causal de exclusión de responsabilidad penal en favor de los farmacodependientes. En ese tenor, no comparto la visión de que, en este caso, el estatus ilegal de la adquisición de la semilla clausure las facultades de control constitucional de esta Corte para evaluar la validez de las refrendadas normas administrativas impugnadas y, en su caso, confeccionar un remedio jurisdiccional en caso de concluirse la existencia de una violación.³

8. Sentada esta premisa, procedo a desarrollar las razones por las cuales me separo de algunas consideraciones centrales del proyecto (A) y, en otras más, sugiero razonamientos complementarios (B).

² Idem.

³ Sobre la posición de esta Sala sobre la preeminencia de la procedencia del fondo del asunto por encima de la improcedencia por la dificultad de la precisión de los efectos de una eventual concesión de amparo, véase la tesis aislada CLXXIV/2015, visible en la página 440 del Libro 18 (mayo de 2015) Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: “IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. NO PUEDE ALEGARSE VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE RELATIVIDAD DE LAS SENTENCIAS Y, POR ELLO, SOBRESEER EN EL JUICIO, CUANDO SE ACTUALIZA LA EXISTENCIA DE UN INTERÉS LEGÍTIMO EN DEFENSA DE UN DERECHO COLECTIVO.”

Así como la tesis CLXXIII/2015, visible en la página 441 del Libro 18 (mayo de 2015) Tomo I de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: “IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. NO SE ACTUALIZA LA CAUSAL RELATIVA A LA IMPOSIBILIDAD DE REPARAR A LA VIOLACIÓN ALEGADA, SI SE DETERMINA LA EXISTENCIA DE UN INTERÉS LEGÍTIMO A UNA ASOCIACIÓN CIVIL EN DEFENSA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN.”

A

Algunas precisiones

9. La sentencia aprobada en la sesión de hoy concluye que el conjunto normativo citado (con la excepción de los artículos 234 y 368⁴) resulta inconstitucional por violar el derecho al libre desarrollo de la personalidad, toda vez que la medida legislativa no supera un estándar de proporcionalidad *en sentido amplio*, que exige verificar si la medida persigue una finalidad constitucionalmente válida, y en caso de que se supere esa grada, si supera sucesivamente un análisis de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. En el caso, se concluyó que las normas impugnadas buscan una doble finalidad constitucionalmente válida (la protección de la salud y del orden público) y constituyen medidas idóneas para su protección (aunque por lo que respecta al orden público no porque impida el aumento de la criminalidad, sino porque el consumo de la marihuana es un factor que aumenta la posibilidad de causar accidentes vehiculares); sin embargo, se señala que la medida es innecesaria porque existen medidas alternativas igualmente idóneas para proteger la salud y el orden público que intervienen en el derecho fundamental en un grado menor y se trata de una medida desproporcionada en sentido estricto, pues genera una protección mínima a la salud y orden público frente a la intensa intervención al derecho de las personas a decidir qué actividades lúdicas desean realizar.
10. En relación con estos argumentos, aunque coincido con algunos de ellos, desde mi perspectiva, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación debió abordar la evaluación de la validez constitucional de la ley, primero, mediante la fijación de un estándar de escrutinio construido de forma más precisa que el identificado en la propia sentencia como "*estándar de proporcionalidad en sentido amplio*"⁵, ya que éste genera una ambigüedad de la doctrina constitucional sobre la forma en que se controlara la regulación del Estado en todas aquellas actividades que, *prima facie*, podrían insertarse en el ámbito del derecho al libre desarrollo de la personalidad.

⁴ Sobre estos dos numerales (que en el citado precedente no formaron parte de la *litis*), la sentencia concluye que deben considerarse como válidos, dado que sólo establecen una relación de sustancias y a establecer una definición de lo que debe entenderse por autorización sanitaria y sus tipos. Aunque coincido con esa determinación, lo hago a partir de la lógica de mis votos en los citados asuntos donde me pronuncié sobre la farmacodependencia.

⁵ Visible en la página 44 de la sentencia.



VOTO CONCURRENTE EN EL
AMPARO EN REVISIÓN 1115/2017

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

11. A mi juicio, no es clara la intensidad de escrutinio que se aplica a lo largo de la sentencia para analizar la medida legislativa. Si bien, al aludirse a los dos primeros pasos del escrutinio constitucional parece utilizarse uno de carácter regular, con posterioridad parecería aplicarse los pasos de uno estricto; en suma, sin decirlo, la decisión adoptada por la mayoría aplica un escrutinio intermedio. En ese sentido, considero que debió abundarse sobre las diversas intensidades de escrutinio constitucional y establecer cuál era la aplicable al caso concreto.
12. En mi opinión, este Tribunal Constitucional debió precisar de manera más rigurosa cuándo una regulación prohibitiva como la analizada en el caso concreto debe someterse a un escrutinio más estricto y cuándo debe sujetarse a un mero escrutinio de razonabilidad ordinario. La línea divisoria entre ambos criterios de escrutinio se encuentra en el concepto de “expectativa razonable de privacidad” dentro del cual se debe exigir al Estado demostrar que su medida es la menos restrictiva posible, además de ser útil para la realización de un fin constitucionalmente previsto de manera expresa. No obstante, fuera de esta expectativa de privacidad –y esto hay que subrayarlo–, un tribunal constitucional debería aplicar un escrutinio ordinario por ubicarse en un ámbito de libre configuración legislativa, en el cual los órganos democráticos deben tomar las decisiones de política pública. La existencia de la expectativa razonable de privacidad permite identificar aquellas actividades esenciales para la autonomía de la persona, de aquellas libertades negativas residuales susceptibles de regularse con un margen de configuración de las ramas políticas y los órganos reguladores.
13. En efecto, desde mi perspectiva, esta Suprema Corte debió ser clara en precisar que su estándar de escrutinio constitucional se construye a partir de la interiorización normativa de los dos pilares del modelo de estado democrático: por un lado, la justiciabilidad y tutela jurisdiccional de los derechos humanos y, por el otro, el principio de autogobierno inserto en la cláusula democrática. Mediante el primero se otorga el mandato a los jueces constitucionales de garantizar que los poderes democráticos no intervengan en el núcleo esencial de los derechos humanos; a través del segundo se debe garantizar que sean los representantes populares, integrando los órganos legislativos, quienes tomen las decisiones de política pública, en coordinación con el Poder

Ejecutivo, quien también goza de legitimidad democrática, sin que los jueces puedan posicionarse como instancias de veto de las mismas (siempre que se respeten los derechos humanos, como en el caso, el derecho a la intimidad, a la autonomía, a la vida privada y al libre desarrollo de la personalidad).

14. La interiorización de estos dos elementos en un estándar de escrutinio hubiera permitido acomodar la decisión tomada en una serie de precedentes resueltos por esta Suprema Corte, en los que se ha reconocido la validez de leyes que han tenido el propósito de limitar una gran cantidad de opciones privadas de las personas en aras de alcanzar ciertos fines de política pública, sobre la base de un estándar de escrutinio de razonabilidad. Esto era obligado después de haber emitido sentencias que han establecido que nuestro modelo de estado constitucional adopta el modelo de estado regulador,⁶ el cual se basa en la premisa de que la regulación técnica de las opciones privadas de las personas en el agregado permite la consecución de fines de políticas constitucionalmente previstas de manera expresa, como es competencia económica, telecomunicaciones, protección al consumidor, salud pública, seguridad pública, asentamientos humanos, medio ambiente, etcétera, regulación a la cual los jueces deben otorgar deferencia.⁷

⁶ Ver la ejecutoria de la controversia constitucional 117/2014 emitida por el Tribunal Pleno el siete de mayo de dos mil quince.

También ver la tesis CCCXVII/2014 de esta Primera Sala, visible en la página 574 del Libro 10 (septiembre de 2014) Tomo I de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ESTADO REGULADOR. PARÁMETRO CONSTITUCIONAL PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DE SUS SANCIONES."

Así, como la tesis CCCXVIII/2014 de esta Primera Sala, visible en la página 588 del Libro 10 (septiembre de 2014) Tomo I de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "PRINCIPIO DE LEGALIDAD. MODULACIÓN APLICABLE A LA VERTIENTE SANCIONATORIA DEL MODELO DE ESTADO REGULADOR."

⁷ Véase, por ejemplo, la tesis de jurisprudencia 57/2006 de esta Primera Sala, visible en la página 89 del Tomo XXIV (septiembre de 2006) del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS. EL GRAVAMEN QUE ESTABLECE PARA ENAJENACIÓN DE BEBIDAS ALCOHOLICAS OBEDECE AL MANDATO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 117, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."

Ver tesis aislada LXXVII/2014 de esta Primera Sala, visible en la página 552 del libro 4 (marzo de 2014) Tomo I de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "PROPIEDAD PRIVADA EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE. SUS MODALIDADES."

Ver tesis de jurisprudencia 26/2011 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 17 del tomo XXXIV (agosto de 2011) del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO FUMADORES EN EL DISTRITO FEDERAL. MODELOS PARA MANTENER LA COEXISTENCIA ENTRE FUMADORES Y NO FUMADORES."

Por analogía, véase la tesis aislada LVII/2000, visible en la página 158 del Tomo XII (julio de 2000) del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL. LA LEY EXPEDIDA POR LA ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL DISTRITO FEDERAL NO VIOLA EL ARTÍCULO 27 CONSTITUCIONAL AL IMPONER MODALIDADES A LA PROPIEDAD PRIVADA."

Ver, por analogía, la tesis LVIII/2013 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1121 del Libro XXII (julio de 2013) Tomo 1 del Semanario Judicial de la



VOTO CONCURRENTENTE EN EL
AMPARO EN REVISIÓN 1115/2017

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

15. Así, como lo había anticipado, el elemento diferenciador de estos casos con el analizado en esta sentencia, es que sobre la actividad del consumo personal de marihuana para fines lúdicos, en un espacio de intimidad alejado de terceros que no han prestado su consentimiento, se proyecta nítidamente una expectativa razonable de privacidad. Claramente, frente a una arquitectura constitucional semejante, diseñada para dar lugar a una estructura regulatoria robusta del Estado, no podría suscribir, sin matizarla, la conclusión de la sentencia de que el derecho al libre desarrollo de la personalidad sólo encuentra como límite los derechos de terceros. Desde mi punto de vista, esta conclusión queda incompleta si no se agrega el concepto de la expectativa razonable de privacidad, que permita a esta Suprema Corte identificar progresivamente aquellas actividades estrechamente asociadas con la autonomía y dignidad de las personas para llevar sus vidas de acuerdo con sus planes personales, de aquellas otras actividades sujetas a la regulación de las autoridades hacedoras de política públicas con un amplio margen de apreciación, a la que no se podría aplicar un estándar de escrutinio como el utilizado en la sentencia.

16. Por lo tanto, en esta ocasión, coincido en que la prohibición total de todas las actividades necesarias para permitir a una persona llevar a cabo un acto íntimo como es el consumo de marihuana es violatorio del derecho a la intimidad, y al libre desarrollo de la personalidad (y agregaría, a la autonomía, a la dignidad y al desarrollo de un proyecto de vida), porque el grado de intervención estatal generado por el sistema administrativo de prohibición se inserta en un ámbito protegido por una expectativa legítima de privacidad. Empero, todas aquellas actividades sobre las cuales no se proyecte dicha expectativa de privacidad pueden ser reguladas por el legislador con un amplio margen de apreciación para la realización del bien público, sólo sujetas a un escrutinio ordinario de razonabilidad.

17. Considero que no todos los actos asociados al consumo de la marihuana se insertan en un ámbito tutelado del derecho a la intimidad. Aisladamente, los actos consistentes en la siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión y

transporte del estupefaciente "cannabis" (sativa, Indica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC" (tetrahidrocannabinol, con sus respectivos isómeros y sus variantes estereoquímicas) carecen de la proyección de la expectativa de privacidad y, por tanto, el legislador democrático tiene amplios poderes de configuración. En otras palabras, de ubicarnos en alguna de estas áreas de manera aislada, no cubiertas por una expectativa de privacidad legítima (u otro derecho humano), entonces, la Suprema Corte debe evitar evaluar la conveniencia, sabiduría o lógicas de las leyes que regulan dichas actividades, y sólo declararlas inconstitucionales si no se supera un estándar de razonabilidad, ya que no nos corresponde sustituirnos en los hacedores de política pública, quienes responden a la población en elecciones periódicas.

18. En este sentido, mi desacuerdo con la sentencia de la mayoría radica en la falta de precisión de una metodología de evaluación integral que precise los límites de los poderes de revisión de los jueces constitucionales, a saber, los distintos ámbitos de política pública confiados a las ramas políticas del Estado, para reservar sus facultades de escrutinio más estricto sobre aquellas acciones estatales que intervienen el núcleo esencial de un derecho humano. En el caso del derecho al libre desarrollo a la personalidad, el núcleo esencial es aquél sobre el cual se proyecta una expectativa razonable de privacidad. Para determinar si se constata una "expectativa de privacidad legítima" se requiere determinar si las expectativas subjetivas de los individuos de mantener algo como privado se pueden calificar como razonables y justificadas por las circunstancias en un estado democrático de derecho.

19. En diversos precedentes he destacado la obligación de este Tribunal Constitucional de someter a un escrutinio estricto todas aquellas medidas que supongan una intervención en un espacio de intimidad sobre el cual se proyecta una expectativa razonable de privacidad; de ahí que en varios asuntos de esta Corte haya votado en contra de la mayoría y sostenido la inconstitucionalidad de las leyes penales que sancionan a una persona por cualquier conducta asociada a su farmacodependencia, más allá del límite de gramaje permitido para consumo personal.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

VOTO CONCURRENTENTE EN EL AMPARO EN REVISIÓN 1115/2017

20. Dicho todo lo anterior, en el resto del presente voto procedo a desarrollar dos precisiones a mi posición: el tipo de derecho a la privacidad involucrado en el caso concreto, y los efectos ampliados en el amparo.

B

Argumentos complementarios

21. Como se puede observar del presente voto, he utilizado intercambiamente los derechos a la intimidad y al libre desarrollo a la personalidad. En múltiples asuntos he sostenido que existe en la Constitución Federal una preocupación de proteger la privacidad que se manifiesta en distintos preceptos constitucionales (artículos 16, inviolabilidad del domicilio; 9, derecho de asociación; 14, protección al goce de bienes, posesiones y libertades mediante el debido proceso, entre otros) y que todas las personas tienen derecho a la preservación de un grado de privacidad frente a las acciones de autoridades.⁸

22. Al respecto, tal como lo establecen los precedentes de la Primera Sala⁹, tanto la Constitución como los tratados internacionales de que es parte México apuntan a señalar una misma preocupación por tutelar un ámbito de privacidad e intimidad que el Estado debe garantizar, en diferentes niveles de protección dependiendo del derecho que se trate. La vida privada, como derecho general, tiene distintos niveles de protección, dependiendo si el Estado se constituye como garante o protector del mismo frente a la sociedad o si debe ser garante frente a su propia actividad; esto es, importa si su actividad es la que pone en riesgo esa privacidad o si es la actividad de otros ciudadanos, ante lo cual el Estado debe servir de defensa. Incluso podría desarrollarse tomando en consideración el derecho a la vida digna y al proyecto de vida que cada individuo decida tomar.

23. Ahora bien, estimo que no sólo el derecho a la intimidad es el que se encuentra involucrado en el presente caso, sino que se trata de un conjunto de derechos, incluidos, entre otros, el derecho a la libertad de conciencia, dignidad e, incluso, el derecho a la vida, entendiéndolo desde la perspectiva interamericana a lo que cada quien considera una vida digna y al proyecto de

⁸ Véase mi voto concurrente en la acción de inconstitucionalidad 32/2012 resuelta por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión del dieciséis de enero de dos mil catorce.

⁹ Ver, entre otros, el Amparo en revisión 338/2012, resuelto en sesión de 28 de enero de 2015.

vida que cada individuo decida tomar. Todos estos derechos pueden ser desarrollados en lo que en la doctrina constitucional se ha considerado como derecho al libre desarrollo de personalidad y varios de ellos son, incluso, derechos que no se pueden suspender bajo ninguna circunstancia, de conformidad con el artículo 29 de nuestra Constitución.

24. Pues bien, sobre la base de las anteriores premisas y con las precisiones hechas, coincido con el sentido de la sentencia. Es indudable que el consumo de cualquier droga genera un problema de salud. Sin embargo, desde una interpretación constitucional, no existe –y hay que subrayarlo– ninguna razonabilidad en que la respuesta del Estado al consumo de marihuana sea la reclusión y la prohibición absoluta del consumo de la misma.
25. Los quejosos en el presente asunto solicitaron a la COFEPRIS que autorice y regule su consumo de marihuana. Es claro que la Constitución otorga la facultad regulatoria a dicho órgano para establecer condiciones objetivas de cultivo, transporte, cosecha, acondicionamiento y preparación de la marihuana. Lo que no permite nuestra Constitución –y esto hay que subrayarlo– es hacer nulo un derecho humano, como lo es el libre desarrollo de la personalidad, la dignidad, la intimidad y la libertad de conciencia.
26. Aquí es necesario recordar que –salvo la prohibición de tortura, esclavitud y discriminación– ningún derecho humano es absoluto, razón por la cual es posible imponer límites válidos al ejercicio de los mismos. En ese sentido, si bien los individuos tienen el derecho de ejercer los derechos referidos, el Estado puede válidamente imponer límites que no vulneren el válido ejercicio de aquéllos. Es por ello que considero que al brindar las autorizaciones, la autoridad responsable podría válidamente y con la debida justificación tomar en cuenta las limitaciones que podría tener el consumo de la misma (como, por ejemplo, la edad), tal como se hace con otras sustancias como en el caso del alcohol y del tabaco. Lo que no puede permitirse, como ya lo destacué, es hacer nulo un derecho.
27. Finalmente, me referiré a los efectos de la concesión del amparo otorgado en la sesión de hoy. Por un lado, en la sentencia se declara la inconstitucionalidad de ciertos artículos impugnados y, por otro, se ordena a la autoridad



VOTO CONCURRENTENTE EN EL
AMPARO EN REVISIÓN 1115/2017

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

responsable a emitir autorizaciones para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos y recreativos. Sobre estos aspectos, la Primera Sala ha destacado que la obligación de *reparar* es una de las fases imprescindibles del derecho de acceso a la justicia, por lo que el sistema de justicia debe ser capaz de reparar el daño realizado por parte de las autoridades y de impulsar un cambio cultural¹⁰. Así, ha agregado que “el efecto de una sentencia de amparo debe caracterizarse por una ductilidad que permita tutelar de la manera más efectiva posible los derechos de las personas¹¹.” Asimismo, en seguimiento de la doctrina y jurisprudencia internacional, la Primera Sala ha destacado que las reparaciones incluyen la restitución integral, la reparación pecuniaria (por daño material e inmaterial) y la no pecuniaria (restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición)¹².

28. En relación con lo anterior, al tiempo que coincido en la ampliación de los efectos en el caso concreto, considero que además de revocar la negativa de la autoridad respecto de los quejosos para su cultivo, cosecha, transporte y consumo personal de marihuana, podría haberse aclarado que la COFEPRIS debe regularlo con base en criterios objetivos sobre la mejor forma de contener las externalidades que válidamente deben regularse (siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento y transporte), de conformidad con las facultades que tiene para ello. Como lo reitero, esta Suprema Corte ha revisado en varios precedentes las facultades regulatorias de los órganos especializados y ha concluido en la necesidad de aplicar un escrutinio de razonabilidad ordinario compatible con la deferencia que los jueces deben otorgar a los órganos regulatorios expertos.

29. Una vez precisados los efectos del amparo, estimo conveniente aclarar que a esta Suprema Corte no le corresponde sustituirse en el legislador democrático, por lo que nada en esta sentencia impide que, considerando los vicios de inconstitucionalidad detectados, vuelva a legislar para determinar la mejor

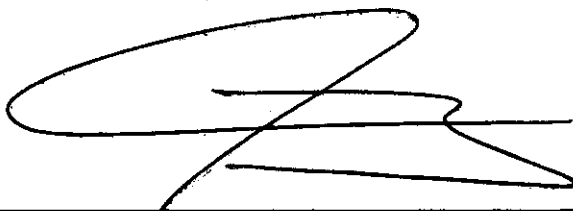
¹⁰ Cfr. Amparos en revisión 152/2013, 554/2013 y 476/2014, op cit.

¹¹ Cfr. Amparo en revisión 554/2013, 25 de marzo de 2015. Ponente: Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ver también la tesis de rubro. “ACCESO A LA JUSTICIA. LA OBLIGACIÓN DE REPARAR A LA PARTE QUEJOSA CUANDO SE HA CONCLUIDO QUE EXISTE UNA VIOLACIÓN A SUS DERECHOS HUMANOS, CONSTITUYE UNA DE LAS FASES IMPRESCINDIBLES DE AQUÉL.”

¹² Cfr. Amparo en revisión 476/2014. 22 de abril de 2015. Ponente: Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

**VOTO CONCURRENT EN EL
AMPARO EN REVISIÓN 1115/2017**

política pública en el tema. En razón de lo anterior y como consecuencia lógica de mis votos respecto a la farmacodependencia, coincido que es inconstitucional la prohibición absoluta de consumo de marihuana. Por tanto, reitero mi voto a favor del proyecto, por razonamientos distintos en algunas partes y complementarios en otras.



MINISTRO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA



**LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES GUTIÉRREZ GATICA
SECRETARIA DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA**

Evidencia criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: DocFirExpElect1.PDF
Secuencia: 2407874

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a su original.

AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Firmante	Nombre:	MARIO ISAAC MENDOZA FERREYRA	Estado del certificado:	OK	Vigente
	CURP:	MEFM930320HMCNRR05			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6673636a6e0000000000000000000000d4d	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	30/01/2019T17:37:21Z / 30/01/2019T11:37:21-06:00	Estatus de firma:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	39 1c e7 46 ad cd 80 0a 63 75 67 13 f5 c3 57 13 90 b9 e5 05 6c 63 62 ee 66 d9 49 05 4b 28 3e 74 12 4d 71 11 37 33 59 07 fb fa 32 38 8f 10 43 95 82 f9 a5 0d a0 0d e7 c6 38 70 c2 66 aa 5d 86 1a c5 fd 37 a7 aa 7c c1 2e 35 6a ab 5e c5 7f 2d c3 56 37 f4 7b 4f 3d 52 58 2d b8 d7 a9 df c3 df 43 d2 30 7d e6 e1 ed cc 16 f4 f4 8c 25 9d 02 53 35 7a 72 82 a6 be f4 af 1a 1e 23 10 0f 4a 87 29 bc 85 e4 40 83 33 b5 57 5b a0 a6 f7 de 77 9d 91 62 84 5f ae b4 88 e0 10 86 12 7c ac b4 c5 90 01 7c e4 42 de 33 a3 8b 34 9a 4b b6 6c b8 d9 16 5a 45 0e 51 10 b9 bc 90 73 d9 7b 43 14 71 12 3c 4a b9 6a bf 50 55 b2 d2 30 08 cb 36 d5 f7 9e 42 1e a9 c9 d4 37 b2 77 d9 ca ac 5a c5 de c7 2b 02 ba 68 3a 42 e1 78 fb 26 26 cb ac 6c aa 1f 71 68 db 93 9d d5 ac ec 68 60 e2 53 3a a0 af 41 63 ce b7 db			
Validación OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	30/01/2019T17:37:22Z / 30/01/2019T11:37:22-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	OCSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado de OCSP:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6673636a6e0000000000000000000000d4d			
Estampa TSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	30/01/2019T17:37:21Z / 30/01/2019T11:37:21-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado TSP:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	2410992			
	Datos estampillados:	9B7950D335CBBA4A3251BE15529329A846B2DB2F			